



29 de junio de 2021

CARTA CIRCULAR NÚM. 2021-02

A: Secretarios, Directores, Jefes de Agencia, Departamentos, Oficinas, Comisiones, Organismos, Corporaciones Públicas y demás instrumentalidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, bajo la jurisdicción y competencia de la Ley Núm. 15-2017

Re: **TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA SUFRAGAR LA NÓMINA, BENEFICIOS Y GASTOS OPERACIONALES DE PUESTOS Y EMPLEADOS TRANSFERIDOS PROVENIENTES DE FONDOS DE INGRESOS ESPECIALES DEL AÑO FISCAL 2021-2022**

I. Base Legal

Este Carta Circular se emite en virtud de la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, conocida como la “*Ley del Inspector General de Puerto Rico*” y en armonía con lo dispuesto en el “Reglamento sobre Asuntos Programáticos de la Oficina del Inspector General”, Núm. 9135 de 13 de diciembre de 2019.

Con la aprobación de la Ley Núm. 15-2017, *supra*, se ordenó la transferencia del personal, los puestos y fondos (presupuesto) destinados a las unidades, divisiones u otros componentes que estén debidamente relacionados con la auditoría interna de las entidades gubernamentales no excluidas en el Artículo 4 de esta Ley¹.

Mediante los Artículos 11 y 12 de la Ley Núm. 15-2017, se ordenó además la transferencia de los auditores y personal relacionado con la auditoría interna de las entidades gubernamentales a la Oficina del Inspector General (OIG).

Por su parte, el Artículo 4 de la Ley Núm. 15-2017, *supra*, la OIG “tendrá plena autonomía administrativa, presupuestaria, operacional y fiscal, que le permita, sin que se entienda como una limitación, ejercer la custodia y el control de sus fondos y propiedad pública”. Esta autonomía, surge de las funciones de auditoría y fiscalización que lleva a cabo la OIG.

¹ Véase Artículos 11, 12 y 16, Ley Núm. 15-2017. La Ley Núm. 15-2017, también ordenó la transferencia a la OIG del equipo, récords, documentos, activos, pasivos, contratos, propiedades, materiales y expedientes, así como los balances remanentes de fondos destinados a las unidades, divisiones u otros componentes relacionados con los procesos de auditoría interna.

El Artículo 2 de la citada Ley Núm. 15-2017, dispone que será responsabilidad de cada Secretario, Director Ejecutivo, Jefe de Agencia o cuerpo rector del Gobierno observar y velar por que se cumpla con la política pública contenida en la citada Ley, y en correspondencia, estos tienen el deber ministerial de adoptar todas aquellas medidas y realizar todas aquellas gestiones que estimen necesarias para asegurar la efectiva y adecuada transferencia del personal, según lo ordena dicha Ley. Véase el Artículo 11 (b) de la citada Ley Núm. 15-2017, *supra*.

II. Propósito

En el presupuesto del año fiscal 2020-2021, certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), se han asignado las partidas relacionadas a los Pagos a la OIG, por concepto de la nómina y gastos operacionales de los auditores y personal transferido, en virtud de la citada Ley Núm. 15. A través de la Resolución Conjunta del Presupuesto Certificado para los fondos de ingresos especiales (“special revenue funds” o “SRF”), se estableció la cuantía a ser transferida. Ante esto, la OIG ha establecido un proceso de facturación a estas entidades gubernamentales para que se le transfieran los fondos estipulados en la Resolución Conjunta, los cuales son necesarios para sufragar los gastos de nómina y operacionales de estos empleados o puestos transferidos.

Durante el año fiscal 2020-21, varias entidades incumplieron con los términos establecidos por la OIG, para llevar a cabo las transferencias requeridas. De ocurrir incumplimientos similares este año fiscal nuevamente, el pago de la nómina de los empleados, desafortunadamente, se verá afectado. La OIG se encuentra en total desacuerdo con que esto suceda. Por lo que las autoridades nominadoras de las entidades concernientes, tienen el deber y responsabilidad, de hacer las gestiones necesarias para cumplir con lo requerido. Por ello, se emite la presente Carta Circular.

Tras la certificación del presupuesto para el año fiscal 2021-2022, la JSAF nos ha anticipado que algunas entidades gubernamentales, deberán realizar transferencias presupuestarias a la OIG, provenientes de SRF.

Ordenada esta distribución presupuestaria, la OIG tiene el deber de garantizar el pago a tiempo de la nómina, beneficios y gastos operacionales de los empleados y puestos transferidos y cuyo presupuesto ha sido asignado a través del SRF.

Ante esta situación, resulta imperativo que las entidades gubernamentales realicen en el término que le sea requerido mediante facturación la transferencia presupuestaria, de manera que no se afecten los salarios de estos empleados. Además de lo señalado, constituye política pública que el personal que compone el Gobierno de Puerto Rico a través de sus distintas agencias e instrumentalidades será asignado de conformidad con los estatutos, reglamentos y normas administrativas aplicables a los mismos, mantendrá su empleo regular, con su respectiva compensación salarial. Véase la Ley Núm. 112-2017,

conocida como la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”². Por ende, es una responsabilidad ministerial de las agencias hacer el pago requerido mediante factura³.

De conformidad con el Artículo 17 de la Ley Núm. 15-2017, la Inspector General puede imponer sanciones administrativas por violación a las normas y órdenes emitidas por la OIG. Véase el Capítulo VII del citado Reglamento Núm. 9135.

III. Procedimiento

El pago de la nómina de todos los empleados de la OIG es la prioridad. Asegurar el pago de salarios a tiempo garantizará la continuidad de las funciones de la OIG y el pleno ejercicio de las funciones de examen, investigación y auditoría, consistente con la autoridad operacional y administrativa que fue conferida por la citada Ley Núm. 15.

Para cumplir con dicho objetivo operacional y administrativo, estamos emitiendo el siguiente proceso de cumplimiento inmediato, de manera que las entidades gubernamentales transfieran a la OIG el presupuesto correspondiente a nómina, beneficios y gastos operacionales, en el término provisto. Avalado el pago de estos mediante la resolución conjunta del presupuesto, no debería existir dilación alguna en su transferencia.

A esos efectos, será obligación de las entidades cumplir con lo siguiente:

- a. En cumplimiento con lo anterior, la OIG emitirá las facturas correspondientes al salario de los empleados y puestos transferidos de estas entidades gubernamentales a más tardar el 2 de julio de 2021. Se emitirá la factura con la cantidad específica que la entidad gubernamental deberá pagar como mandato de ley, según lo establecido en la Resolución Conjunta del Presupuesto Certificado.
- b. Se les **ordena** a las autoridades nominadoras, directores de finanzas y personal aplicable en las entidades gubernamentales que acusen recibo de la factura emitida, y en correspondencia lleven a cabo la transferencia presupuestaria requerida a la OIG a más **tardar el lunes, 5 de julio de 2021**. El mismo tiene que ser realizado en un término no prorrogable, en los plazos y las fechas establecidas en la factura emitida por la OIG.
- c. El pago deberá efectuarse a través de transferencia electrónica a la cuenta de banco de la OIG que se indica en la certificación bancaria, emitida junto a la factura.

² Asimismo, la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” **y la reglamentación interna de la OIG** reconoce a los servidores públicos como el “recurso más importante para el Gobierno de Puerto Rico”. De igual forma, dicha Ley establece que “cada empleado público del Gobierno Central e instrumentalidades será retribuido respetando el principio de mérito y de conformidad con el salario establecido para el puesto que ocupa.

³ El Artículo II, Sección 16 de la Constitución de Puerto Rico reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo razonable, a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo”. (énfasis nuestro)

IV. Advertencia

Aquella autoridad nominadora, director de finanzas y/o empleado responsable en cada entidad gubernamental que incumpla con las disposiciones de esta Carta Circular podrá ser **sancionado con una multa que no excederá de \$5,000.00**, por infracción, respectivo a cada puesto que haya sido transferido a la OIG.

Esperamos el cumplimiento inmediato a estas directrices, para así evitar que se emitan las sanciones anteriormente apercibidas.

De necesitar alguna información, se puede comunicar con la Inspectora Asociada de Asuntos Administrativos de la OIG, CPA Tayra Marcano, al correo electrónico tayra.marcano@oig.pr.gov o al teléfono 787-679-7997, ext. 1003.

NOTIFÍQUESE,



Ivelisse Torres Rivera
Inspectora General